

Cesión de datos de asegurados a Ayuntamientos. Informe 224/2006

La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, de la celebración de un Convenio con un Ayuntamiento en el que los mediadores de seguros, por una parte, y las compañías, por otra, pondrían a disposición de la Corporación “información en supuestos de accidentes de tráfico referente a vehículos y personas que los conducen y la vigencia de los seguros que dan cobertura a dicho vehículo”.

Como cuestión previa, debe indicarse que se desconoce el contenido del convenio al que se hace referencia en la consulta ni la finalidad que justifica la firma del mismo, por lo que la respuesta que ha de darse habrá de ser necesariamente genérica, sin poder entrar a analizar las circunstancias que pretenden resolverse mediante la firma del tan citado convenio.

La transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso en los supuestos previstos en el artículo 11.2, entre los que no se encontraría, en principio, el sometido a esta Agencia.

A mayor abundamiento, debe indicarse que la cesión, sin más, a las corporaciones locales de los datos referidos a vehículos asegurados no se encuentra prevista ni en las normas reguladoras del fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA), ni en el fichero creado en aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 15/1999, según la cual “También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento del afectado. No obstante, será necesaria en estos casos la comunicación al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quién sea el responsable del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación”.

Del mismo modo, y en relación con la actividad mediadora, la cesión planteada tampoco tendría acomodo en lo dispuesto en Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación del seguro privado ni en el Proyecto de nueva Ley actualmente en tramitación parlamentaria.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los términos generales de la cuestión planteada, el Convenio al que la misma se refiere no encontraría acomodo en lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de que, en

caso de referirse dicho convenio a supuestos concretos, y sin que ello implique prejuzgar la procedencia o improcedencia de la cesión, la cuestión podría ser objeto de análisis específico por esta Agencia.